

Cristianismo y Política

Alejandro Angulo N. S.J.*

I.

El fenómeno típico de los últimos veinte años en Colombia es la concentración del poder político. Después del período denominado de *la Violencia*, el régimen político colombiano entra en un ciclo que bien pudiera llamarse del *estado de sitio*, dado que el setenta y ocho por ciento del tiempo transcurrido desde la caída de Rojas Pinilla en 1957, el país ha vivido en un régimen de excepción. Esta prolongada vigencia de reglas extraordinarias ha gestado la concentración de poderes en el ejecutivo, con detrimento de las ramas legislativas y judicial.

Una aproximación cristiana al estudio de dicho proceso tiene que hacerse por antítesis. Las consecuencias de esa acumulación del poder político no ha sido positivas. Por consiguiente, en la primera parte de esta consideración se tratará de rastrear esos inconvenientes a la luz de principios teológicos y morales para proponer, en una segunda parte, los caminos que una sociedad cristiana puede ofrecer como salidas del laberinto totalitario.

¿República o satrapía?

La veintena larga de años durante los cuales ha vivido el país en

* Licenciado en Fil. y Teol., Universidad Javeriana; Doctor en Demografía, Universidad de París; Magister en Sociología, Universidad de California; Director del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Bogotá.

casi continuo estado de sitio ha producido el deterioro de la autoridad civil.

A fuerza de recurrir a medidas especiales se ha carcomido la aceptación del primado del presidente y se le empieza a mirar como al despota. La fuerza sustituye a la razón tanto en los gobernantes como en los gobernados y la relación de unos a otros se torna en un tenso vaivén de imposiciones y exigencias apoyadas más en el chantaje que en miramientos al bien común o respeto de las personas.

La trasposición de motivos del bien común a la voluntad arbitraria de un individuo produce el endurecimiento del poder. Cesan los motivos por los cuales el mandatario es elegido y sus propios electores se convierten en sus inquisidores. La ficción democrática se vuelve tanto más tenue cuanto mayor es el recurso a la fuerza, hasta que se desencadene el huracán de la violencia. En este punto el camino social se hace impasable e irreversible. La carrera de la violencia tiene sus propias leyes que en ningún caso coinciden con los principios cristianos emanados del amor.

Es posible preguntarse si Colombia ha entrado ya en el torbellino de la violencia, dada la trayectoria violenta que precede y acompaña a este proceso de endurecimiento de la autoridad. De hecho los diez años que preceden al ascenso y a la caída del dictador son el escenario de una verdadera guerra civil no reconocida oficialmente por los historiadores de secundaria, pero no

por ello menos mortífera. Y si bien es cierto que los años del Frente Nacional que estamos considerando no sufren la comparación con las matanzas anteriores, también es posible prever que una captación unilateral de poder por parte de un sector minoritario de la población es la preparación más adecuada para un conflicto de las proporciones conocidas en El Salvador contemporáneo.

Quando la sal se corrompe

El endurecimiento de la autoridad conlleva factores peligrosos. El empleo de la fuerza degenera en la total devaluación de la vida humana que es, en fin de cuentas, el último grado de la deshumanización. Pero cuando las circunstancias son tales que ponen en juego la vida de individuos y grupos como presupuesto del poder, es claro signo de que la autoridad se ha desnaturalizado y quienes la detentan se han corrompido.

El ejercicio de un poder despótico que pisotea las vidas humanas es, generalmente, concomitante de un abuso de los recursos nacionales por medio de una administración pública puesta al servicio de intereses privados.

El debate político actual en Colombia ha girado en torno a la moralidad nacional y la corrupción de la administración pública. No se dispone de la información necesaria para juzgar si se trata de síntomas alarmanes.

Confirmación adicional de semejante diagnóstico lo puede suministrar una encuesta de prensa en la cual el número de negocios turbios y desfalcos de la administración pública es de tal magnitud que brinda firme apoyo a los llamados moralistas de los protagonistas políticos. Podría decirse que la corrupción del poder en la Colombia de hoy es del dominio público.

Un estado en cama

Todos los anteriores síntomas apuntan hacia un debilitamiento general de la autoridad. El empleo creciente de la fuerza revela una pérdida de poder convocatorio. Y la corrupción de los funcionarios públicos es el cáncer que mina los sistemas de gobierno y les enajena la credibilidad. En uno y otro caso se adivina una disminución de energía administrativa y una paulatina desaparición del respaldo popular que es la materia prima del gobierno democrático.

Cuando el poder no puede recurrir al plebiscito porque se ha malquitado las masas por el abuso, la reacción obvia es revestirse de la apariencia de poder. Los funcionarios públicos en esta etapa de la crisis de autoridad terminan por confundir la fuerza física con el poder.

Y la imposibilidad de invocar el bien común cuando se ha descuidado el interés de las mayorías conduce a desvirtuar los objetivos en el manejo de la cosa pública: el fantasma de la nación, figurado

por instituciones deterioradas y legislaciones obsoletas viene a reemplazar a la realidad nacional que es un pueblo vivo. Y la tribuna estatal, sitio propio de las consignas del desarrollo de la república, se transforma en el escenario de la autojustificación. Interminables debates sobre el estado de derecho y un recurso paranoico a las cláusulas legales y a las reformas de las cláusulas es el rasgo típico de un estado débil frente a un pueblo traicionado.

El reconstituyente diseñado por los intereses materiales para conservar ese estado débil es la famosa doctrina de la seguridad nacional. Sobre esto se volverá más adelante.

Tres en uno: La Biografía del poder en Colombia

La flaqueza estatal en su afán de aparentar vida y energía tropieza con la división del trabajo político esbozada por Montesquieu.

La crisis de poder incide sobre la propia identidad del Estado; y el Ejecutivo, en medio de sus arranques paranoicos, encuentra incómoda dejar la función legislativa a un equipo diferente.

En forma parecida, un Estado de emergencia que tiene que manipular la lay a su antojo para sobrevivir en medio de la rapiña interna de los burócratas y de la desaprobación externa del pueblo, termina por ver en el poder judicial un estorbo y un potencial adversario.

Colombia no ha sido ajena a este síntoma anunciador de la muerte de las democracias. Los meses han sido testigos de los primeros intentos del Ejecutivo para abolir un poder judicial que se tomaba por completamente domesticado dentro de la trayectoria de los últimos años. El conflicto se dió y el espectro democrata logró subsistir.

No viene ocurriendo así con el poder legislativo. La trayectoria de anulación de la Cámara de Representantes y del Congreso de la República data de finales de los años cincuenta, cuando el recurso frenético al estado de sitio ha logrado que veinte años de república recubran quince de dictadura.

Evidentemente, el Ejecutivo durante el estado de excepción no es un solo hombre, ni carece absolutamente de presión de los partidos políticos. Pero el hecho legal no es menos parecido a la dictadura por el atenuante de una aprobación virtual por parte de la oligarquía económica. Para el pueblo raso las consecuencias son bien similares.

Un estudio de los cuerpos legislativos colombianos en el período aludido a lo largo de las presentes consideraciones revela un paulatino difumarse de Cámara y Congreso delante de un Ejecutivo que cada vez decide más, por sí y ante sí, sobre las cuestiones vitales del país.

Se da, pues, una aceptación implícita del retiro del legislativo impuesto por el Ejecutivo revelando así una alianza subyacente que se escudriñará más adelante.

El producto final de esta disminución de responsabilidades compartidas es un fortalecimiento aparente de la Presidencia de la República que en realidad viene a ser una capitulación de la política ante la violencia.

Democracia con manopla

La consolidación de los tres poderes en un solo órgano exige refuerzos especiales. El estado sin capacidad convocatoria, agobiado por las dolencias internas y aterrorizado por las tempestades externas, se coloca el guantelete militar para que no le resbale el cetro de su trémula mano.

La transmisión sistemática de poderes de los civiles a los militares es otro rasgo típico del último veintio colombiano. Ya el caso mismo de la dictadura de Rojas Pinilla es una aplicación de ese principio transmisor. Con todo, parece que la dirigencia civil hizo un balance negativo de esa entrega de poderes y resolvió recuperarlos prontamente para devolverlos poco a poco.

A partir de las presidencias del Frente Nacional, el Ejército de Colombia ha ido escalando sucesivamente los peldaños del trono: funciones policiales, ministerio de la defensa, administración pública regional, administración de la justicia. Las que antes pudieron ser tareas temporales de emergencia, han llegado a convertirse en atribuciones.

Esa transformación del apoyo o último recurso del poder en la sus-

tancia o primera instancia del gobierno es la muestra más fehaciente de que Colombia hoy se rige por la fuerza.

Es tal el grado de fusión entre poder político y fuerza armada que lo que se produce es una confusión y la raíz de tan funesta simbiosis ha sido apuntada más arriba: el sistema político al vaciarse de poder real, por su renuncia a administrar el bien común, se ha convertido en una armazón hueca. Con el fin de asegurar los intereses que incubaron la renuncia al bien común, fué necesario rellenar a toda prisa ese muñeco de paja, de un estado al servicio privado, sustituyendo la fuerza de las armas a la energía de la autoridad.

El Estado es lo primero, aun en contra de su propio pueblo cuyos intereses no cuentan frente a la codicia de los dueños y administradores de los recursos nacionales.

Es así como llega a gestarse la doctrina de la seguridad nacional que permite a los ejércitos nacionales invadir sus propias naciones. Así como se ha trastocado la noción de bien común, así también se ha tergiversado la razón de la fuerza armada. La expresión de tamaña sinrazón es el establecimiento de guarniciones militares dentro de las plantaciones, de las factorías, de las universidades y la proliferación de quepis en las gobernaciones, alcaldías e intendencias de todo el país.

La invasión de la fuerza en el escenario social es el entierro de la convivencia humana y el preludio a la hora de los lobos. No es, por

conseguinte, raro que paralelo a la decadencia política examinada se observe un recrudescimiento de la guerrilla, de la violencia callejera y de todos los géneros delictivos propios de una sociedad en descomposición.

Violencia llama violencia

Para Colombia el vocablo "violencia" no es nuevo. Los años cuarenta vieron una hecatombe revestida de colores políticos y alimentada por el ansia de tierras. Ya desde aquellos días todo el proceso político estuvo tinto en sangre. La perseguida paz de los partidos pareció lograrse con el pacto del Frente Nacional. Pero ya se ha visto que más que un armisticio se operó una prestidigitación. La violencia de partido, con víctimas, de ordinario campesinas, se transforma en la violencia de un Estado que incorpora ambos partidos, con víctimas tanto campesinas como ciudadinas. Y como el recurso a la fuerza solo se contraresta con la fuerza, el endurecimiento del poder es respondido con un recrudescimiento de la guerrilla en campos y ciudades y por una radicalización de la protesta popular que pasa de las marchas callejeras a la pedrea y el vandalismo con la misma expedición con que el Estado pasa del arresto a la tortura.

El proceso de la violencia es una reacción en cadena. La fuerza no es justificable ni siquiera en términos de una seguridad nacional cuando el Estado ha renegado de su mandato popular. El pueblo no admite que la ley sea solamente para los de ruana, como reza el adagio.

Y así se crean situaciones como la simpatía que despiertan las hazañas guerrilleras entre la masa de los sin techo, los sin pan y los sin médico.

Y al propio tiempo se da la paradoja de que quienes han destruido la civilidad por la fuerza son los mismos que reclaman la paciencia de un civismo sin sustancia.

El culmen de la aberración violenta es la aparición de la tortura y su generalización. Si el aniquilamiento de la vida es el más alto grado de deshumanización, la tortura es su expresión más refinada. Y su generalización es el síndrome de un ascenso hacia el filo genético de la bestia. Por eso es alarmante verificar en el proceso colombiano el empleo creciente de la tortura y la tecnificación y racionalización de sus métodos como si se tratara de una ocupación propia de seres humanos.

La presencia de la tortura confirma la tesis que se ha venido sustentando acerca de la espiral de violencia que ha venido a disolver el talante político y a convertirlo en un forcejeo fatal.

Pasión y muerte de los partidos

No es oportuno referirse a la vida de los partidos políticos en Colombia porque la época de referencia en estas consideraciones se define por la desaparición, de hecho, de tales partidos. Si su gloria y sus gestas forman una larga historia, el veintenio del Frente Nacional sella con un pacto bipartidista, otro pacto más fuerte: el pacto clasista.

Es apenas lógico que un proceso centralizador del poder en el Ejecutivo, tal como se ha venido analizando, conlleve un desmejoramiento notable de los partidos políticos. La fuerza no deja campo a la política. Dieciseis años de presidentes obligados y de paridad política en la burocracia llevan a olvidar el sentido de las elecciones y el significado de cotejo por el poder.

Hoy es difícil, casi imposible, diferenciar entre los partidos, porque a fuerza de concentración bipartidaria, se borraron los rasgos peculiares de cada uno.

Y en su lugar se ha generado un manejo clientelista que ha puesto la administración pública al nivel del botón electoral y ha reducido la república a ser la armadura que revisten los propietarios de la tierra y del dinero en la lucha con los siervos de la gleba.

La pobreza de los programas partidistas brilla en cada campaña. Ni concepciones nacionales, ni estrategias de largo alcance, ni propuestas orgánicas. Un recurso desmembrado a la demagogia barata y un lenguaje ácido para referirse a los contricantes tipifican los discursos políticos electorales.

El debate parlamentario tampoco va más allá ni posee más fuste, puesto que los asuntos de que se ocupan los órganos legislativos carecen de trascendencia. El ausentismo de los congresistas y de los representantes deja traslucir la frustración de los elegidos y su convicción acerca de la banalidad de sus reuniones. La única legislación que defenderán los

padres de la patria, aun en contra del Ejecutivo cuando fuere necesario, es el alza periódica de sus sueldos.

El pueblo testigo de tamaña decadencia ha optado por el abstencionismo electoral. Las proporciones de votantes para las corporaciones democráticas han venido decreciendo hasta la quinta parte de la población que podría sufragar.

Este fenómeno que por una parte se ha denominado el cretinismo parlamentario y por la otra la apatía política de las masas revela un estado raquíutico de la democracia y explica los nuevos canales de participación que el pueblo intenta frente a una maquinaria política herumbrosa y pasada de moda.

La centralización en el Ejecutivo supone la desaparición de la vigilancia que pueden ejercer un Congreso activo y una Cámara de oposición. Y el estado de sitio produce el mismo efecto que la dictadura de un hombre sólo sin ofrecer la mala imagen de los dictadores latinoamericanos.

Pero el mantenimiento de una fachada democrática sin funciones democráticas requiere un manejo clientelista que las hace ineficientes y cargosas para el presupuesto nacional.

Es inevitable que dicho montaje disfuncional termine por corromperse y por infectar todo el tejido social. Y el caso colombiano, en este aspecto, ha venido alcanzando niveles desaçostumbrados. Ni la investidura pública, ni la disciplina

militar han bastado para proteger las conciencias supuestamente cristianas de sus protagonistas. Al observador externo, después de algunos pocos intentos, lo invade la convicción de que venalidad, soborno y chantaje son principios constitucionales de administración pública en Colombia.

La pesimista conclusión del recuento anterior es que la política, el aparato político en Colombia, se derrumba carcomida por su propia podredumbre. Los órganos políticos padecen los últimos grados de una artritis que los paraliza y encorva sobre sí mismos. Como consecuencia, la exclusividad creciente se traduce en falta cada vez mayor de participación popular. Es decir, que los caminos de la libertad y el orden se van bloqueando hasta la desesperación popular. Y si por otra parte, lo que resta de esas vías pacíficas va siendo minado cada vez más por la violencia, no es de asombrarse que las guerras internas vayan tomando formas cada vez más sangrientas. La justicia se administra por la propia mano. La ley la dicta el más fuerte.

Finalmente la nación desaparece y el futuro es de los sobrevivientes de la guerra. Esta visión apocalíptica, es, todavía, un ejercicio de futurología. Pero el análisis de las tendencias es una colección de verificaciones.

El aspecto que se quiere resaltar aquí es cómo el panorama social colombiano deja mucho que desear desde un enfoque cristiano. Los derroteros de violencia señalados no pueden conducir sino al odio que alimenta la guerra. Y el odio es el

contrario del amor que forma el núcleo de la teología católica.

II

Bautizando a Colombia

La falla fundamental de todo el proceso enunciado en los acápites precedentes es el ocaso del amor en las relaciones sociales colombianas. La grieta que separa los niveles políticos, que no son sino abstracciones de una masa de personas, se está sembrando con pólvora. Y quienes han recibido el encargo de cerrar esa brecha parecen dedicados a ahondarla y a incrementar su poder explosivo.

El catálogo moralista de los vicios que tipifican las quiebras señaladas no serviría de mucho ni como análisis ni como solución. Pero un esfuerzo por detectar los polos orientadores de un desarrollo para restituir su energía constructiva sí puede ser útil.

Sin creer que hay un modelo cristiano de desarrollo sí sería oportuno redescubrir valores cristianos que puedan inspirar la construcción de una sociedad. Hay una ética cristiana que permite revisar el principio del bien común sobre el que se construyen las estructuras políticas. Hay, también, una teología cristiana que posibilita releer el análisis de las clases sociales y entender su dinámica constructiva.

Por consiguiente, hay una tarea muy concreta de colaboración para las facultades de teología y las de ciencias sociales.

Aunque puede ser una falacia creer que el nervio del cambio social es la transformación de los valores, también lo es creer que aquellos no cuentan.

Reconstruir el bien común

En la raíz de la crisis política esbozada se ha podido identificar la tendencia centralizadora del Estado para contrarrestar su debilidad. A su turno, la debilidad proviene de la pérdida del poder de convocatoria. O sea que el Estado vela cada vez menos por el bien común de todos los colombianos y sirve cada vez más a un reducido grupo de empresarios nacionales y extranjeros.

De ser el árbitro de la distribución de los recursos el Estado pasa a ser el defensor de la concentración de los recursos en unas pocas manos. Pero como la justificación básica de un gobierno es la gestión del bien común, ese Estado para legitimarse tiene que recurrir a la pirueta ideológica de probar que esa concentración de bienes es indispensable para el bien común.

Los actuales niveles de vida de una gran parte, la mayor parte, de la población colombiana hace pensar que la enunciada justificación no corresponde con los hechos. Que las enfermedades, el hambre y la ignorancia de una mayoría desautorizan por completo la teoría del bien común y quitan su legitimidad a un Estado que no logra satisfacer esas carencias razonablemente. Lo cual no sería imputable al Estado si no se tropezara con una minoría que no sólo no carece de nada pero

que despilfarra lo que a la mayoría le falta.

El amor cristiano que prescribe la comunión como forma de relación del hombre con Dios y de los hombres entre sí no se compadece con los abismos de desigualdad en la distribución de los recursos, que no solamente tolera sino que refuerza el Estado colombiano. La motivación cristiana exigiría el establecimiento de mecanismos redistributivos eficaces y la vigilancia continua para que no fueran esquivados por quienes más capacidad de compartir tienen en el país.

También las relaciones de los individuos en los diferentes niveles sociales deben ser mediadas para impedir que la desigualdad en ellas se convierta en explotación del hombre por el hombre. La motivación cristiana prescribe el establecimiento de contratos entre personas y exige su vigilancia para que no se conviertan en obligaciones de indignidad y esclavitud.

Laborem exercens

Juan Pablo II en su encíclica sobre el trabajo pergeñó agudamente el esquema de valores cristianos que pueden dar la clave a los colombianos para salir del laberinto de la violencia en que se han extraviado.

Restaurar la jerarquía de objetivos del desarrollo supone reconocer que el hombre es el principio y el fin del trabajo humano. Por el trabajo el hombre se realiza y cumple el plan de Dios. Tiene, por consiguiente, derecho a su trabajo. Y el trabajo es, al propio tiempo la cons-

trucción de la sociedad humana y la construcción del reino de los cielos. El hombre está llamado a vivir en ambos.

La construcción antagónica, en la que la acumulación en pocas manos es la fuerza impulsora, contradice radicalmente los valores cristianos así se haga en nombre de la propiedad privada o de la propiedad colectiva de los bienes.

El valor fundamental del cristianismo, el amor, excluye la producción sin brújula de un consumismo materialista, donde el trabajo pierde su significado de actividad humana y es perfectamente sustituible por la máquina, en la carrera frenética de una producción que no mira las necesidades ni respeta las capacidades humanas.

El módulo cristiano de la sociedad es el hombre. Y el cristianismo siempre ha visto con claridad la naturaleza de ídolo del dinero, en su capacidad de esclavizar al hombre y de llevarlo a convertirse en lobo para el hombre.

La iluminación cristiana de un plan de desarrollo recae sobre los programas sociales que atienden a las relaciones humanas y a ellos da la prioridad. Sin desconocer que la inversión social supone la producción de lo que se ha de invertir, el criterio cristiano insiste en que la realización humana es el verdadero progreso.

El mundo loco, loco

El desenfoque del desarrollo colombiano que se descubre en la raíz

de la crisis política, analizada en la primera parte, no es un patrimonio nacional. Por desgracia, las condiciones y los limitantes que el Estado encuentra para adoptar los criterios cristianos para el desarrollo social le son, en parte, impuestos desde fuera.

El desquiciamiento social que invierte la posición del hombre en el mundo y entroniza al dinero en el vértice de la pirámide valorativa es un fenómeno que trasciende las fronteras de un país. Pero es justamente esa circunstancia la que hace más urgente recuperar en islotos de cordura la coherencia humanizante de no separar el desarrollo de las personas del desarrollo de los recursos.

La demencia deshumanizante del mundo contemporáneo es perfectamente contradictoria en sus cánones políticos. Al propio tiempo que prescribe al Estado la no interferencia en el juego sangriento del mercado libre que exalta al dinero y aniquila al hombre, le exige que intervenga al precio que sea en ese mismo juego para garantizar que el hombre se deje destruir. Esta es la perversa teoría de la seguridad nacional acoplada con el modelo económico de la escuela de Chicago.

La luz cristiana, aunque no sirve para refutar los postulados de ninguna teoría económica, sí tiene poder para descalificar una política que incluye factores deshumanizantes para un pueblo dentro de sus estrategias de desarrollo. Y al señalar los criterios sobre el hombre, el trabajo y la riqueza está implícitamente abriendo el camino a la

adopción de relaciones de producción que privilegien las necesidades de la mayor parte por sobre los prejuicios y caprichos de una minoría.

El poder para qué?

Una vez que se admite el primado del hombre dentro de la creación (primera lección de cristianismo), el sentido de la política se recupera.

La autoridad, cuando es inspirada por el amor (primera prescripción cristiana) pierde los visos del despotismo para transformarse en servicio de la comunidad. Si el proceso colombiano del último veintenio hubiera sido cristiano, en vez de concentración se habría observado aumento de colegialidad y florecimiento de corporaciones intermedias.

La participación política, más que frustración, había ofrecido posibilidades de progreso de las colectividades, porque la burocracia, en lugar de botín presupuestal, habría recobrado su carácter de servicio público.

Pero más que prolongar esta especie de ejercicio de pensar con el deseo podría ser oportuno examinar las condiciones de posibilidad de una cristianización del poder en Colombia.

Tal examen requiere una apreciación del impulso actual de la violencia que aparentemente ha llegado a un punto de no retorno. Habría también que preguntarse sobre las

energías reales para un proceso de conversión teniendo en cuenta que la conversión de los sistemas supone más que la conversión de los individuos.

Repuestas cristianas

La primera cuestión acerca del nivel de violencia y su reversibilidad parece tratar aún de resolverse cuando se piensa en la propuesta de paz de algunos guerrilleros y en la Comisión de Paz nombrada por el Presidente de la República.

Pero, de otra parte, las relaciones de producción se endurecen amenazando con la nugatoriedad de pactos que no tienen correspondencia en concertaciones económicas.

El pacto político puro puede ser una ilusión. El sentido completo de la pregunta "el poder para qué?" es precisamente ese.

Las relaciones sociales no se alteran con la sola buena voluntad de un puñado de funcionarios, ni siquiera de una colectividad política. Es preciso que los propósitos nacionales, si existen cambien y si no existen se formulen y acepten.

Los casos de revoluciones frustradas son muchos y aleccionadores.

El empleo adecuado de la fuerza es otro de los motivos de frecuente ilusión. Pacifismo y belicismo no son los términos apropiados de una discusión mientras no se haya resuelto el problema de los objetivos del desarrollo. Y cuando éste se ha planteado en los escuetos términos de la

apropiación de los recursos es muy posible que nunca se llegue a la respuesta humana.

Estos puntos sugieren ya que la pregunta sobre las energías para una conversión viene a resolverse en que la solución a los rompecabezas políticos está fuera de la política, al igual que la salida de los embotellamientos económicos requiere algo más que economía. Y si se refuerza el principio metodológico habría que concluir que la solución de los acertijos humanos está más allá del hombre.

Para el teólogo esto es tan claro, como oscuro para el científico social. Pero es justamente esta compartamentalización de las ciencias la que hace imposible comprender y realizar los cambios necesarios.

La consideración final de esta ya larga enumeración de miserias de la sociedad colombiana y de su relación con las lacras de la sociedad mundial viene a ser metodológica.

No es posible un cambio político estructural a través de tácticas y estrategias puramente políticas. Si el problema político es su carácter deshumanizante, como se ha mostrado profusamente, parece lógico inferir que la solución no llega por intercambio de sistemas políticos, ya que éstos se demuestran todos vulnerables a la deshumanización.

Con mayor razón puede afirmarse lo mismo de los sistemas económicos que manipulan aspectos mucho más limitados y en cuanto

tales más susceptibles de deshumanizar.

Si se tuviera la clave política, podría bien afirmarse que la solución de los problemas económicos es económico-política.

Al intentar corregir los abusos del poder es preciso hacer intervenir factores resistentes al poder. Y aquí se ha sugerido que hay que introducir el amor.

Es claro que la ciencia política y, por tanto, la práctica política no tiene recursos ni teóricos ni prácticos para manejar este concepto que se ha relegado al campo de la psicología. Ni siquiera se le expide carta de ciudadanía en la sociología de la familia. Se considera, generalmente, que el amor funciona al nivel del sentimiento.

Y, sin embargo, el cristianismo ha construido toda su elaboración teórica sobre este principio. La teología cristiana muestra cómo el amor antes que sentimiento individual es el principio de la existencia de la sociedad. Por consiguiente, sustraerle este fundamento a la sociedad es abocarla al fracaso, convirtiéndola en el vórtice que devora hombres.

La pregunta siguiente, es a no dudarlo cómo conjugar esa elaboración teológica con la elaboración política y cómo gestar una práctica social coherente.

La respuesta también es previsible. Ese es el desafío de la teología y de la práctica política de hoy en Colombia. Intentos se han hecho dentro y fuera del país que se han

tropezado con las limitaciones propias de una teología y de una ciencia política poco desarrollada. Este subdesarrollo teórico sigue a una práctica subdesarrollada del cristianismo como de la política.

Edificaré mi Iglesia

El programa que se puede sugerir a una asamblea católica, como ésta, es precisamente comenzar por casa. Si la Iglesia Colombiana hubiera estado realmente construída desde 1940, es muy posible que los desarrollos políticos aquí recapitulados no habrían seguido esas pautas.

Es inconcebible que una inversión de valores tan espectacular se haya producido en Colombia estando el cristianismo vivo en ella.

La conjunción de prácticas cristianas auténticas con prácticas sociales corrompidas es o bien un indicador de esquizofrenia colectiva, o bien el signo cierto de que las primeras ni son auténticas ni son prácticas.

Dentro de los funcionarios eclesiásticos cristianos ha perdurado una ilusión óptica acerca de la práctica cristiana. Parece llegado el momento de reflexionar creativamente sobre las formas concretas en que una agrupación social como la Iglesia Católica en Colombia puede colaborar eficazmente en la recuperación del país. Podría decirse que ante la realidad de los valores corrientes observables en Colombia, el país está por catequizar.

Más aún, podría insinuarse que los caminos de la crisis política no son completamente diferentes de los de la crisis religiosa y que sería preciso examinar criterios como la participación y la representatividad, sin dejarse obnubilar por las ficciones jurídicas. Parece contundente analizar cuál es el estatuto real de la Iglesia en Colombia hoy, como sociedad visible, para poder descubrir los enlaces con la sociedad política y económica en que se ubican los cristianos. Sin esto difícilmente se puede comprender cómo se va a producir la diálisis de los valores de un sistema al otro.

La hipótesis corriente de que la conversión personal de los cristianos basta para transformar las estructuras civiles se demuestra falsa en los hechos. Se tiene la impresión de que la afiliación religiosa es artificial y postiza, carente de convicción e incapaz de generar

un sistema de relaciones humanizantes.

Por otro lado, los intentos de inserción y de transformación se desconocen como experimentos válidos, por las reacciones naturales que ellos producen dentro de las estructuras que pretenden cambiar.

Esas dos verificaciones arrojan un manto de incertidumbre sobre la naturaleza y la viabilidad de los valores cristianos y producen una vacilación comprensible acerca de la oportunidad de la práctica cristiana contemporánea.

Pese a todo lo cual, la conclusión de estas reflexiones es que hay un camino, que ha sido recorrido por otros peregrinos en otras sociedades y que, por consiguiente, también la sociedad colombiana puede esperar que, en su seno, Cristo edifique su Iglesia.